REPÚBLICA DE COLOMBIA

JUZGADO SEXTO CIVIL DEL CIRCUITO

Manizales, once (11) de marzo dos mil veintiuno (2021).

PROCESO: ACCION DE TUTELA
ACCIONANTE: ADRIANA MILENA GARCÍA
ACCIONADA: JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL
DE MANIZALES
VINCULADO: COOPERATIVA -CAPECOOP
ÁLVARO LÓPEZ ESPITIA
JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MPAL
RADICADO: 17001-31-03-006-2021-00056-00
SENTENCIA No. 30

Se decide la acción de tutela de la referencia, cuyo objeto de estudio corresponde a la solicitud de salvaguarda del derecho fundamental al “*debido proceso*”.

1. ANTECEDENTES

1.1. Escrito de tutela.

Se solicitó en el escrito de tutela que se ordene al JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES revocar el auto por el cual negó la solicitud de nulidad por indebida notificación, la cual se interpuso dentro del proceso ejecutivo que allí le adelantó la COOPERATIVA MULTIACTIVA CAPITAL DE PROGRESO CAPECOOP, y que se radicó bajo el número 17001400301120200017000. Asimismo, que se deje sin efecto el auto por el cual se admitió la demanda en lo atinente a las actuaciones derivadas del mismo, especialmente la etapa de notificación y proceda a notificarla en debida forma al correo electrónico Adriana.garcia113@casur.gov.co.

Como fundamento de las pretensiones, expuso que la COOPERATIVA MULTIACTIVA CAPITAL DE PROGRESO CAPECOOP adelantó demanda ejecutiva en su contra, la cual correspondió por reparto al despacho accionado, para lo cual aquella informó que el correo donde ella, la demandada, recibiría notificaciones es el siguiente dirección electrónica: adrianam72@hotmail.com; y añadió, que casualmente, por situaciones financieras consultó dicho correo el día 12 de diciembre y se encontró con que al mismo le había sido notificada la demanda, lo cual le causó gran sorpresa teniendo en cuenta que ese correo no es de uso ni consulta habitual, pues la dirección que sí es de permanente examen es la siguiente: adriana.garcia113@casur.gov.co.

Adujo que por lo anterior, el día 14 de diciembre de 2020 solicitó al despacho accionado la NULIDAD de las actuaciones adelantadas, por indebida notificación, sin embargo, de dicha solicitud nunca recibió respuesta o notificación, y debió acudir a un tercero para que preguntara por el estado de su petición, y de esta manera se enteró que se había ordenado seguir con la ejecución.

Indicó que a la fecha no ha tenido acceso al expediente y no sabe cuáles fueron las medidas cautelares decretadas en su contra.

1.2. Mediante providencia del 01 de marzo de 2021, se admitió la acción de tutela, se dispuso la vinculación de la COOPERATIVA MULTIACTIVA CAPITAL DE PROGRESO CAPECOOP, se ordenó la notificación de los intervinientes y se les concedió el término de dos (2) días para pronunciarse sobre los hechos.

Por auto adiado en marzo 2 de 2020 se ordenó la vinculación de la NOTARÍA CUARTA DEL CÍRCULO DE MANIZALES, y mediante providencia del día 4 del mismo mes y año se vinculó al trámite al JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES y del señor ÁLVARO LÓPEZ ESPITIA.

1.3. Intervenciones

EI JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES, dio respuesta a la acción de tutela, e indicó que en ese Despacho se tramitó proceso EJECUTIVO SINGULAR promovido por la COOPERATIVA -CAPECOOP contra los señores ADRIANA MILENA GARCÍA y el señor ÁLVARO LÓPEZ ESPITIA, radicado bajo el número 17001400301120200017000. Manifestó remitirse a las actuaciones adelantadas dentro del citado proceso; que la quejosa nunca solicitó acceso al expediente y que las providencias se notificaron por estado. Por último, expuso que mediante auto de fecha febrero 9 de la presente anualidad ordenó seguir adelante con la ejecución, la que mediante oficio del 19 del mismo mes y año fue remitido a la Oficina de Ejecución Civil Municipal, misma que correspondió por reparto al Juzgado Segundo.

EI JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL dio respuesta a la tutela e informó que en ese Despacho cursa proceso EJECUTIVO SINGULAR promovido por la COOPERATIVA -CAPECOOP contra los señores ADRIANA MILENA GARCÍA y el señor ÁLVARO LÓPEZ ESPITIA, radicado bajo el número 17001400301120200017000, y que luego de remitido por el Juzgado de origen, esto es el Once Civil Municipal de Manizales, mediante providencia adiada en febrero 24 de 2021 se avocó conocimiento y se aprobó la liquidación de costas efectuada.

Expuso que las actuaciones presuntamente vulneradoras de los derechos fundamentales de la accionante, son endilgados al Juzgado primigenio, por lo que solicitó negar las pretensiones.

La COOPERATIVA MULTIACTIVA CAPITAL DE PROGRESO -CAPECOOP- contestó la tutela, e indicó que la señor ADRIANA MILENA GARCÍA aportó en el momento de solicitar el crédito ante esa Cooperativa, la siguiente dirección física: Finca San Nicolás, Vereda Cuchilla Santa 2 Plan Casa de los Espejos – antes de la Cuchilla del Salado, Barrio Villapilar, Manizales; también para su ubicación y notificación, suministró la dirección electrónica: adrianam72@hotmail.com.

Adujo que se intentó la citación para notificación a la dirección física anteriormente relacionada, y la misma fue devuelta por la empresa de correo por la causal *traslado de persona*, razón por la cual el Juzgado Once Civil Municipal de Manizales remitió las diligencias al centro de Servicios para los Juzgados Civiles y de

Familia de la ciudad de Manizales para adelantar las notificaciones conforme dispone el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, lo cual en efecto acaeció el día 23 de noviembre de 2020 al correo electrónico que la demandada suministró a la Cooperativa.

Finalmente, expresó que en la notificación del retiro de la Policía Nacional del 28 de febrero de 2018, aportó para notificación la dirección que ahora desconoce, esto es, adrianam72@hotmail.com, dirección que en todo caso, en el mismo escrito de tutela reconoce que pertenece a su dominio. Solicitó denegar las pretensiones.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Debate jurídico:

De acuerdo a la situación fáctica planteada, corresponde al Despacho determinar si el JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES vulneró los derechos fundamentales de la señora ADRIANA MILENA GARCÍA, dentro de las actuaciones adelantadas en el proceso EJECUTIVO que en contra de ésta adelantó en ese Despacho la COOPERATIVA MULTIACTIVA CAPITAL DE PROGRESO -CAPECOOP-.

Lo anterior, previo el análisis de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

2.2. Procedencia de la acción de tutela

2.2.1. Legitimación por activa.

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el derecho que tiene toda persona para reclamar, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección de sus derechos fundamentales cuando los mismos resulten amenazados o vulnerados, a través del ejercicio de la acción de tutela. Acorde con lo precedente, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que puede acudir a la acción constitucional mencionada, toda persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, bien sea por sí misma o por representante, o mediante agente oficioso si el titular de las garantías amenazados o transgredidos no está en condiciones de promover su propia defensa.

De esta manera, la tutela es interpuesta por la señora ADRIANA MILENA GARCÍA y acude a la vía constitucional en su propio nombre, por lo que se encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa.

2.2.2. Legitimación por pasiva.

La acción de tutela se dirige contra la autoridad judicial que presuntamente vulneró sus derechos fundamentales, esto es el JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES, y en ese sentido se considera evidente la legitimación en la causa por pasiva.

2.2.3. Inmediatez

En cuanto al requisito precitado, si bien de conformidad con el artículo 86 Superior la acción de tutela puede interponerse en todo momento y lugar, ha dispuesto la Corte Constitucional que la misma debe promoverse en un término razonable, pues de lo contrario se pondría en riesgo la seguridad jurídica y se desnaturalizaría la acción¹.

En el presente asunto, el actuar supuestamente trasgresor de los derechos fundamentales se dio con las actuaciones adelantadas por el Despacho accionado dentro del proceso ejecutivo en el cual fungió como demandada, y que data desde noviembre de 2020 en adelante. De esta manera se satisface igualmente la exigencia.

2.2.4. Subsidiariedad - Acción de tutela contra providencias judiciales

Mediante Sentencia SU 116 de 2018², la Corte Constitucional recapituló los requisitos generales y especiales para la procedibilidad de la acción de tutela frente a providencias judiciales, en los siguientes términos:

“Esta nueva dimensión abandonó la expresión “vía de hecho” e introdujo “criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”, los cuales fueron distinguidos como de carácter general y de carácter específico. Los primeros constituyen restricciones de índole procedimental o parámetros imprescindibles para que el juez de tutela aborde el análisis de fondo y fueron clasificados así:

“24. Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

*a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente **relevancia constitucional**. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.*

*b. Que se hayan **agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada**, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.*

*c. Que se cumpla el requisito de la **inmediatez**, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones*

¹ Sentencia T 260 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo

² Corte Constitucional, Sentencia SU 116-2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas

judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora **identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados** y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”. (Resaltado fuera de texto).

Los segundos -requisitos específicos-, aluden a los yerros judiciales que se advierten en la decisión judicial y tornan inexorable la intervención del juez de tutela. Esos fueron denominados “causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”, y se explicaron en los siguientes términos:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución”.

2.3. Caso concreto

En el cartulario se encuentran acreditados los siguientes hechos relevantes:

- En el JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES se tramitó proceso EJECUTIVO QUIROGRAFARIO DE MÍNIMA CUANTÍA promovido por la

COOPERATIVA MULTIACTIVA CAPITAL DE PROGRESO -CAPECOOP, contra los señores ÁLVARO LÓPEZ ESPITIA y la señora ADRIANA MILENA GARCÍA, el cual cuenta con el radicado No. 17001-40-03-011-2020-00170-00.

- Del expediente se extrae que dentro del proceso referido, se adelantaron las siguientes actuaciones relevantes:

Actuación	Fecha	Despacho
Radicación demanda	10 de marzo de 2020	N.A
Auto libra mandamiento de pago	12 de marzo de 2020	Juzgado Once Civil Municipal de Manizales
Auto requiere para notificación	30 de septiembre de 2020	Juzgado Once Civil Municipal de Manizales
Solicitud parte demandante para notificación por correo electrónico	27 de noviembre de 2020	Juzgado Once Civil Municipal de Manizales
Auto autoriza notificación por correo electrónico a la demandada ADRIANA MILENA GARCÍA	10 de diciembre de 2020	Juzgado Once Civil Municipal de Manizales
Remisión mensaje de datos para notificación ALVARO LÓPEZ ESPITIA	23 de noviembre de 2020	Juzgado Once Civil Municipal de Manizales
Remisión mensaje de datos para notificación ALVARO LÓPEZ ESPITIA	23 de noviembre de 2020	Juzgado Once Civil Municipal de Manizales
Radicación solicitud de nulidad de ADRIANA MILENA GARCÍA	14 de diciembre de 2020	Juzgado Once Civil Municipal de Manizales
Fijación en lista solicitud de nulidad	14 de enero de 2021	Juzgado Once Civil Municipal de Manizales
Solicitud notificación a la demandada ADRIANA MILENA GARCÍA por correo electrónico	13 de enero de 2021	Juzgado Once Civil Municipal de Manizales
Auto niega nulidad, tiene por no contestada la demanda	28 de enero de 2021	Juzgado Once Civil Municipal de Manizales
Auto ordena seguir adelante con la ejecución	09 de febrero de 2021	Juzgado Once Civil Municipal de Manizales
Reparto proceso a Juzgado 2 de Ejecución Civil Municipal	22 de febrero de 2021	N.A.
Auto avoca conocimiento y aprueba liquidación de costas	24 de febrero de 2021	Juzgado 2 de Ejecución Civil Municipal

Expuestos los anteriores supuestos fácticos, resulta oportuno extraer de la jurisprudencia trascrita párrafos atrás, que las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales han sido reunidas en dos grupos, a saber: Las llamadas 'generales' o 'requisitos de procedibilidad', mediante las cuales se determina si la providencia judicial acusada puede ser objeto de estudio por el juez de tutela. De otro lado se encuentran las causales denominadas 'especiales' o 'específicas', mediante las cuales se establece si una providencia judicial, susceptible de control constitucional, trasgredió o no derechos fundamentales.

Así, al efectuar el análisis del primera grupo de requisitos, considera este funcionario que el asunto puesto en consideración tiene relevancia constitucional en el entendido que lo alegado por el accionante es la vulneración al debido proceso, el cual se encuentra contenido en el artículo 29 de la Constitución Política; en cuanto a la exigencia de haberse agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable; se encuentra lo siguiente: la señora ADRIANA MILENA GARCÍA radicó el día 14 de diciembre de 2020 a través del aplicativo web dispuesto para la recepción de memoriales, solicitud de nulidad, la cual fue resuelta según se evidencia en la foliatura mediante auto adiado en enero 28 de 2021, notificada por estado el día 29 del mismo mes y año.

Ahora bien, frente a la providencia anteriormente expuesta no se interpuso ningún recurso, siendo susceptible únicamente del de reposición contenido en el artículo 318 CGP, por tratarse de un proceso de mínima cuantía. Al respecto relata la accionante que no se enteró del contenido de dicha decisión, pues la misma nunca le fue remitida al correo suministrado en el respectivo memorial, y que únicamente conoció de la negativa dada a su solicitud en data posterior cuando "un tercero" averiguó en el Despacho accionado, y le informaron que se había seguido adelante con la ejecución.

De esta manera, lo primero a determinar es, si el JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES notificó en debida forma el auto por el cual resolvió la solicitud de nulidad.

El artículo 295 CGP dispone:

"ARTÍCULO 295. NOTIFICACIONES POR ESTADO. Las notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de otra manera se cumplirán por medio de anotación en estados que elaborará el Secretario. La inserción en el estado se hará al día siguiente a la fecha de la providencia, y en él deberá constar:

- 1. La determinación de cada proceso por su clase.*
- 2. La indicación de los nombres del demandante y el demandado, o de las personas interesadas en el proceso o diligencia. Si varias personas integran una parte bastará la designación de la primera de ellas añadiendo la expresión "y otros".*
- 3. La fecha de la providencia.*
- 4. La fecha del estado y la firma del Secretario.*

El estado se fijará en un lugar visible de la Secretaría, al comenzar la primera hora hábil del respectivo día, y se desfijará al finalizar la última hora hábil del mismo.

De las notificaciones hechas por estado el Secretario dejará constancia con su firma al pie de la providencia notificada.

De los estados se dejará un duplicado autorizado por el Secretario. Ambos ejemplares se coleccionarán por separado en orden riguroso de fechas para su conservación en el archivo, y uno de ellos podrá ser examinado por las partes o sus apoderados bajo la vigilancia de aquel.

PARÁGRAFO. *Cuando se cuente con los recursos técnicos los estados se publicarán por mensaje de datos, caso en el cual no deberán imprimirse ni firmarse por el Secretario.*

Cuando se habiliten sistemas de información de la gestión judicial, la notificación por estado solo podrá hacerse con posterioridad a la incorporación de la información en dicho sistema”.

A su vez, el artículo 9 del Decreto 806 de 2020, *por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, reza:*

“ARTÍCULO 9o. NOTIFICACIÓN POR ESTADO Y TRASLADOS. *Las notificaciones por estado se fijarán virtualmente, con inserción de la providencia, y no será necesario imprimirlos, ni firmarlos por el secretario, ni dejar constancia con firma al pie de la providencia respectiva.*

No obstante, no se insertarán en el estado electrónico las providencias que decretan medidas cautelares o hagan mención a menores, o cuando la autoridad judicial así lo disponga por estar sujetas a reserva legal.

De la misma forma podrán surtirse los traslados que deban hacerse por fuera de audiencia.

Los ejemplares de los estados y traslados virtuales se conservarán en línea para consulta permanente por cualquier interesado (...).”.

Sea lo primero advertir que la notificación de la providencia que resolvió la solicitud de nulidad, debía efectuarse mediante la fijación en ESTADO, como en efecto se procedió según consta en el expediente que corresponde al proceso ejecutivo dentro del cual se profirieron las decisiones reprochadas; lo cual se pudo verificar también por parte del Despacho por disposición de auto precedente. De esta manera, en la página de la Rama Judicial, en el link <https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-011-civil-municipal-de-manizales/110> se logró visualizar el micrositio web del JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES, a través del cual se publicaron, entre otros, los estados electrónicos, y se evidenció en la lista del estado No. 14 del 29 de enero de 2021, la inclusión del radicado 2020-170, y en la opción *ver estado* se logró descargar la publicación con los datos de los procesos cuyas providencias se notificaron, y la opción del radicado 2020-170 se consiguió visualizar y descargar el archivo contentivo del auto por el cual se resolvió la solicitud de nulidad de la señora ADRIANA MILENA GARCÍA.

De esta manera se concluye que el Despacho accionado notificó en debida forma y conforme la normatividad vigente la providencia que resolvió la solicitud de nulidad, sin embargo, la accionante no interpuso recurso de reposición frente a dicha decisión, y de esta manera, no agotó todos los medios ordinarios a su alcance a fin de que se resolviera la situación planteada en el escenario propio del proceso.

En sumo, en el presente asunto no se supera la exigencia jurisprudencial establecida para abrirle paso al análisis de fondo del asunto, a saber, la utilización de los mecanismos judiciales ordinarios, y no se mencionó ni se evidencia la configuración

de un perjuicio irremediable que conlleve al estudio del amparo deprecado pese a la omisión encontrada.

Cabe resaltar que la acción de tutela no es una instancia adicional o alternativa o paralela a los medios judiciales dispuestos en el ordenamiento jurídico para zanjar cada controversia, y de hacerlo, irrumpiría en asuntos que son competencia de otras autoridades judiciales, que de ninguna manera se acompasa con la esencia y fundamento de la acción de tutela.

Finalmente, encuentra el despacho acertado efectuar las siguientes precisiones. En lo relativo al derecho al acceso a la administración de justicia, el artículo 225 de la Constitución Política dispone: *“Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.”* En cuanto al derecho de postulación, el artículo 73 CGP dispone: *“Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado legalmente autorizado, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa”.*

Por su parte, el artículo 25 del Decreto 196 de 1971, reitera la regla general prevista en el artículo 229 de la Constitución Política, indicando que: *“Nadie podrá litigar en causa propia o ajena si no es abogado inscrito, sin perjuicio de las excepciones consagradas en este Decreto. La violación de este precepto no es causal de nulidad de lo actuado, pero quienes lo infrinjan estarán sujetos a las sanciones señaladas para el ejercicio ilegal de la abogacía.”* La Corte Constitucional se ha referido a dichas excepciones en los siguientes términos: *“La razonabilidad de las excepciones depende, entre otros factores, de la complejidad técnica y de la importancia del procedimiento o actuación de que se trate, de la posibilidad de contar con abogados para que se surtan tales actuaciones, y por supuesto, del valor constitucional de los derechos e intereses que el defensor o el apoderado deban representar”.*^{3,4}

De esta manera, el artículo 28 del Decreto 196 de 1971 establece algunos de los supuestos en los que, por excepción a la regla general, se puede litigar en causa propia sin ser abogado inscrito, a saber, entre otros, en los procesos de mínima cuantía. Ahora bien, dicha concesión no implica que para estos asuntos se flexibilicen o se exonere a los interesados se cumplir con las formalidades propias de los procesos, y ante el desconocimiento de los procedimientos, formas de notificación, términos y demás, incumbe decidir al interesado si debe procurar la asistencia de un abogado, con miras a que sus razones puedan ser expuestas en debida forma, y escuchadas por las autoridades judiciales.

Con todo, la señora ADRIANA MILENA GARCÍA obró en nombre propio dentro del proceso ejecutivo ya relacionado, y si bien ésta alega que no le fue enviado a su correo la respuesta a la solicitud de nulidad, claro quedó que la forma de notificación del pronunciamiento respectivo era por ESTADO, y correspondía a aquella realizar las

³ En este sentido, ver Sentencias T 020/2006, C-49/96 Considerando A; C-071/95 Considerando b); SU-044/95 Considerando 2.

⁴ Sentencia C-875 de 2002

consultas correspondiente a efectos de enterarse de la decisión adoptada por el Despacho cognoscente, y de suyo, controvertirla si no estaba de acuerdo con la misma.

Por las razones esbozadas, se declarará la improcedencia de la tutela invocada, y se dispondrá la desvinculación del trámite del JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL, de la COOPERATIVA MULTIACTIVA CAPITAL DE PROGRESO CAPECOOP, y del señor ALVARO LÓPEZ ESPITIA, puesto que no se evidenció conductas vulneradoras de los derechos fundamentales de la accionante.

Por lo expuesto, el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Manizales, Caldas, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela formulada por la señora ADRIANA MILENA GARCÍA contra el JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES, por las razones esbozadas en las consideraciones.

SEGUNDO: DESVINCULAR del presente trámite a JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL, a la COOPERATIVA MULTIACTIVA CAPITAL DE PROGRESO CAPECOOP, y al señor ALVARO LÓPEZ ESPITIA. Lo anterior, por lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz, con la advertencia que podrá ser impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

CUARTO: ENVIAR el expediente a la H. Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado Por:

**GUILLERMO ZULUAGA GIRALDO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 006 CIVIL DEL CIRCUITO MANIZALES**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

62d943d01cb2ff0aff374d80e4ca05dd790a0b680fbdfd7e3a221b75a7eb8c60

Documento generado en 11/03/2021 04:10:46 PM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>